

# Participación e informalidad en el tejido asociativo de la ciudad de Barcelona: Tendencias y reflexiones



**Autor:**

David Palomera Zaidel  
dpzaidel@gmail.com

**Encargado por:**

Dirección de los Servicios de Acción Comunitaria



# Índice

---

<b>Introducción .....</b>	<b>4</b>
<b>1. Participación en el tejido asociativo.....</b>	<b>6</b>
1.1. Asociacionismo formal en España de los años ochenta a la década de los 2000, en contexto .....	6
1.2. Evolución de la participación y del tipo de perfil en el asociacionismo formal en los últimos años ....	7
1.3. Evolución de las formas de participación puntuales y menos institucionalizadas .....	9
1.4. Características de los procesos participativos, en contexto.....	11
<b>2. Las iniciativas de innovación social como aproximación a las iniciativas informales .....</b>	<b>14</b>
2.1. Grado de formalización de la innovación social y características diferenciales con respecto a las entidades del FGEC.....	14
2.2. Características de las iniciativas de innovación social en el ámbito metropolitano y en Cataluña .....	16
<b>3. El papel de las administraciones públicas en las iniciativas de innovación social .....</b>	<b>18</b>
<b>4. Resumen y reflexiones finales .....</b>	<b>22</b>
<b>Referencias .....</b>	<b>25</b>



## Introducción

---

El Ayuntamiento de Barcelona actualiza periódicamente el Fichero General de Entidades Ciudadanas (FGEC), una base de datos que recoge entidades y asociaciones constituidas formalmente en la ciudad de Barcelona y que permite hacer una aproximación a la realidad del asociacionismo en la ciudad. No obstante, puesto que solo contiene entidades formalizadas, perdemos de vista todo ese mundo informal que dinamiza la participación social y que contribuye a fortalecer los proyectos comunitarios y a satisfacer necesidades más allá del mercado o del sector público. Por ejemplo, podemos pensar en las donaciones puntuales de dinero a distintas causas, la participación en una manifestación, el voluntariado en proyectos, así como en aquellas formas organizativas que no se formalizan legalmente, como pueden ser asambleas entorno a la defensa de derechos sociales o proyectos comunitarios para la transformación del territorio.

Tener presente la evolución de la participación informal y sus características es de vital importancia, puesto que, si estas iniciativas constituyen una parte fundamental del tejido activo de la ciudad, su omisión en los análisis puede acarrear problemas de representatividad y sesgos de la política pública. Por lo tanto, este estudio realiza una serie de aproximaciones sobre cómo ha podido evolucionar la participación en el tejido asociativo, dentro de Barcelona y de su entorno, y pone el énfasis en las formas de participación que no necesariamente se producen a través del asociacionismo formal.

Ahora bien, esta tarea presenta dos dificultades principales. En primer lugar, la propia definición de *informalidad* dificulta encontrar datos sobre estas experiencias. Y, en segundo lugar, realizar una división estrecha entre formalidad e informalidad presenta sus peligros debido a la realidad compleja y cambiante del tejido asociativo. Por ejemplo, las entidades informales que se estudian en un año podrían convertirse en formales en un breve periodo de tiempo. Además, las formas de participación poco convencionales, como cambiar las pautas de consumo, pueden beneficiar tanto a las iniciativas informales como a las formales. Además, la conexión entre el mundo formal y el informal pueden servir como sustituto o bien para revitalizarse mutuamente, por lo que tiene que entenderse que las características de uno pueden afectar al otro. Por último, metodológicamente, la población puede no entender muy bien la diferencia entre formalidad e informalidad, entre participar en una asociación formalizada o una organización que no está registrada, por lo que los resultados de las encuestas de opinión y los estudios al respecto pueden ser ambiguos en esta cuestión. Por todas estas razones, los resultados de este estudio, basado principalmente en una revisión de otros estudios ya realizados, no pretenden ser exhaustivos sino simplemente ofrecer algunas reflexiones sobre **qué puede estar pasando más allá del asociacionismo formal**.

El artículo se divide en torno a tres ejes: evolución del tipo de participación en entidades formales y en otras formas fuera de dichas entidades; una medición de la magnitud de organizaciones que no se encuentran formalizadas en Barcelona, y qué rol puede tener la política pública sobre estas últimas. Así, en el primer apartado **se estudia la participación a través de encuestas realizadas en las últimas décadas**, fijándose sobre todo en lo que ha pasado en torno a Barcelona. El segundo apartado intenta medir cuáles son la magnitud y las características de las formas organizativas no formales, especialmente las que van destinadas a satisfacer necesidades y son reivindicativas. La mejor herramienta que se ha encontrado para realizar esta tarea han sido los estudios realizados recientemente por equipos de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona

(UAB) sobre las experiencias de **innovación social**. En el tercer apartado, se comparan los datos de estos estudios con los datos del FGEC y de la encuesta Panoràmic para conocer hasta qué punto los estudios sobre innovación social cubren a entidades formalizadas en el FGEC, así como para detectar las posibles diferencias entre el tipo de entidades más formales y las organizaciones de tipo más informal. Por último, se ofrece un resumen del estudio y se reflexiona entorno al **origen y la relación de las iniciativas de innovación social con la Administración pública**, para así poder conocer qué rol puede tener la política pública respecto a las iniciativas informales.



# 1 Participación en el tejido asociativo

---

## 1.1. Asociacionismo formal en España de los años ochenta a la década de los 2000, en contexto

Los datos de encuestas indican que en España **desde los años ochenta estuvo creciendo la pertenencia a asociaciones** y que, si en 1980 el 70 % de la gente encuestada no pertenecía a ninguna asociación, en 2002 esa cifra descendía al 60 % (Morales y Mota, 2006). En los años posteriores, la cifra podría haber aumentado ligeramente, pero podemos asumir que no ha sufrido grandes cambios (Alarcón *et al.*, 2015; Pena López y Sánchez-Santos, 2018). Si nos fijamos en la juventud, entre los años ochenta y hasta la década de los 2000, la participación en asociaciones se ha mantenido bastante constante: en torno al 35 % en los años noventa y al 37 % en los años 2000 en la población entre 15 y 29 años (Izquieta y Callejo, 2013). Por lo tanto, **no encontraríamos grandes diferencias entre la participación de la población en general y la de la juventud.**

**De la misma forma que aumentaba la participación, también lo hacía el multiasociacionismo.** Si en 1981 solo el 4 % participaba en más de una asociación, esta cifra llega hasta el 20 % en el 2011 (Pena López y Sánchez-Santos, 2018). Hay que destacar también que el porcentaje de personas que pertenecen a tres asociaciones se ha mantenido en una cantidad en torno al 8-9 %, al menos entre aproximadamente el año 2000 y el 2011 (Morales y Mota, 2006; Peña-López y Sánchez-Santos, 2018).<sup>1</sup>

Ahora bien, a pesar de la creciente evolución en las últimas décadas, **la participación en asociaciones en España sigue siendo relativamente baja en comparación con otros países europeos, así como en comparación con el tiempo que la población dedica a otras actividades.** Dentro del contexto europeo, España se situaba, antes de la crisis del 2008, como una de las democracias europeas consolidadas con menores niveles de participación en asociaciones, tanto cuando se trata de la pertenencia como de la participación en actividades, donaciones y trabajo voluntario (Morales y Mota, 2006). Observando algunas cifras respecto a toda la población, si en los países escandinavos el 90 % de la población tenía alguna afiliación asociativa a principios de los años 2000, las cifras solo llegaban al 20-30 % en países del sur y este de Europa. Incluso la densidad asociativa de municipios y barrios catalanes como Gràcia (9,4 asociaciones por cada 1.000 habitantes), siendo este último de los barrios más densos de España, era notablemente inferior a la mayoría de ciudades equivalentes europeas (Morales y Mota, 2006). Esta situación parece haberse mantenido cuando estalló la crisis económica: el Eurobarómetro de 2011 saca como resultado que solo el 15 % de los españoles de más de 15 años afirmaban realizar alguna actividad de voluntariado de forma ocasional o regular, muy lejos de la media del 24 % de la UE-27 (Parlamento Europeo, 2011).

En cuanto al tiempo dedicado al asociacionismo en comparación con otras actividades, los datos de la Encuesta de empleo del tiempo del INE de los años 2009-2010 analizados por Izquieta y

---

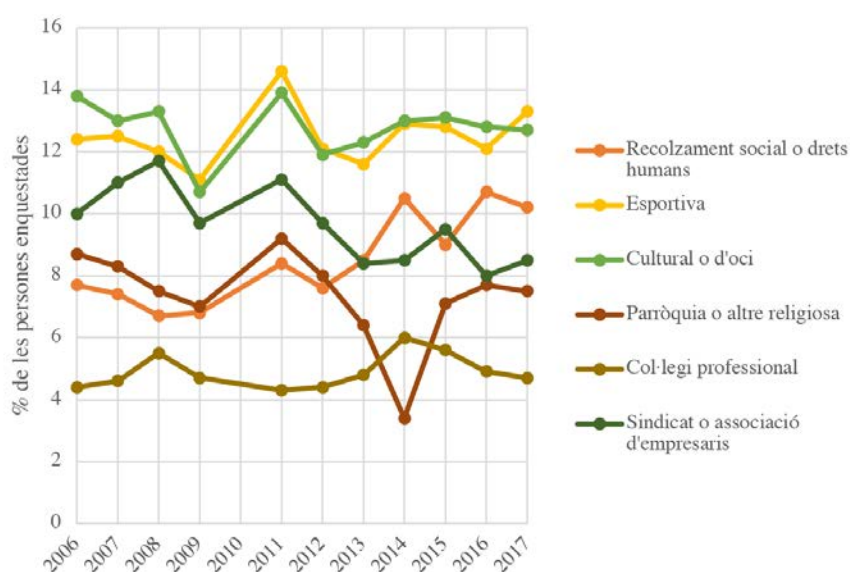
<sup>1</sup> Esta evolución queda constatada en el 2017 en Cataluña por el Consejo Asesor de Investigación del Observatorio del Tercer Sector, que concluye que es común el fenómeno de personas que colaboran en varias organizaciones al mismo tiempo. (Fernández y Alonso, 2017)

Callejo (2013) nos muestran la escasa presencia del tiempo medio dedicado a la participación asociativa de las personas de 10 años y más en España. Mientras que se dedicaban a esta, **de media, 9 minutos a la semana**, el tiempo dedicado a la televisión suponía más de 15 horas y al ordenador cerca de 3 horas.

## 1.2. Evolución de la participación y del tipo de perfil en el asociacionismo formal en los últimos años

Para poder estudiar la evolución reciente de la participación según el tipo de entidad, hemos consultado los barómetros del CIS del año 2006 hasta el 2017. En las encuestas se pregunta por la pertenencia a una asociación o grupo, por lo que no deben entenderse estos datos como pertenencia exclusivamente a asociaciones formales, si no quizás, más ampliamente, también a aquellas más informales. En la siguiente gráfica, lo primero que advertimos es que, del mismo modo que en el asociacionismo formal en Barcelona predominan las entidades deportivas y culturales (Palomera, 2019), también en España destacan estas por encima las demás, con una participación más o menos estable del 2006 al 2017 en torno al 12 % y al 14 % de las personas encuestadas.<sup>2</sup> Si miramos las tendencias del resto de categorías, hay que destacar dos fenómenos que pueden estar relacionados. Por un lado, una cierta caída progresiva de personas que pertenecen a un sindicato o asociación (se pasa del 10-12 % al 8-10 %) **y un aumento del número de miembros de organizaciones de apoyo social y derechos humanos** (se pasa de cerca del 8 % al 10 %). Con respecto a las entidades religiosas, podría existir una ligera tendencia decreciente, pero, a pesar de alguna bajada inusual de las respuestas, se ha mantenido en torno al 8 %, mientras que la participación en colegios profesionales se ha mantenido bastante estable cerca del 5 %.

Figura 1. Evolución de las respuestas del barómetro del CIS a la pregunta “¿Pertenece (participa activamente o no) a un grupo o asociación?”. Porcentaje de personas encuestadas, por cada tipo, 2006-2017



<sup>2</sup> Los datos del Eurobarómetro de 2011 mostraban, para el contexto europeo, una tendencia parecida: de media, el 24 % de los europeos afirman participar en organizaciones o asociaciones deportivas; el 20 %, culturales, y el 16 %, de apoyo social o derechos humanos (Parlamento Europeo, 2011).

Fuente: elaboración propia con datos de encuestas periódicas del CIS. Población de más de 18 años (N » 2.475 por cada encuesta). Para el año 2007 se ha utilizado la encuesta con número 2633 y para el 2014, la 3021.

La evolución de los datos del CIS en los últimos años, en parte, están en línea con las conclusiones de otros estudios, que explican cómo el mundo asociativo en España ha experimentado un incremento de las entidades de tipo secular (en torno a entidades culturales, deportivas y ONG) en detrimento de entidades de tipo más político (incluidas las sindicales) y las religiosas (Pena López y Sánchez-Santos, 2018). En este sentido, estos últimos autores, siguiendo los resultados de Rodríguez *et al.* (2003) y de Vázquez (2010), afirman que habría habido una tendencia en las últimas décadas hacia un asociacionismo formal de tipo puramente participativo y lúdico, y desvinculado del religioso, ideologizado o de tipo más reivindicativo. Sobre la clase de participación de la juventud en España, varios estudios indican una tendencia similar (Izquieta y Callejo, 2013; Ariño, 2004, mencionado en p. 100 en Pereda *et al.*, 2012): desde los años noventa hasta la actualidad la juventud se ha ido desvinculando de organizaciones políticas y religiosas (así como de los proyectos políticos) y ha aumentado la participación comunitaria en organizaciones de índole lúdica y festiva, muchas veces en torno a asociaciones deportivas y culturales. Ahora bien, tras la crisis de 2008 y el posterior resurgimiento de los movimientos sociales, igual que en otras tendencias políticas como el movimiento feminista, el fortalecimiento de la economía social y solidaria, la emergencia climática y la actual crisis de la COVID-19, podría tener lugar un aumento de la implicación en proyectos más reivindicativos y políticos dentro del mundo más formal. En este sentido, el aumento de la participación comunitaria en entidades de apoyo social que muestra el CIS en España podría ser un reflejo de esa tendencia.<sup>3</sup>

Además, Pereda *et al.* (2012) apuntan a una **disminución del componente “militante” de la juventud** y añaden que los compromisos de los jóvenes con organizaciones formales suelen ser de corto plazo, a tiempo parcial y **no se encuentran socialmente estructurados sino individualmente orientados**. Las conclusiones del Consejo Asesor de Investigación del Observatorio del Tercer Sector durante el 2017 irían en la misma línea, y señalan que, si bien la acción comunitaria y otras fórmulas de empoderamiento desde la proximidad se han extendido, la participación comunitaria de un tipo más efímero también se ha incrementado, tanto en organizaciones informales como formales (Fernández y Alonso, 2017). Ahora bien, también apuntarían a que en los últimos años se ha ido **difuminando la línea entre profesionales y personas usuarias**, con los primeros adoptando un rol de colaboradores y provocando que se extienda una forma de organización más horizontal, transparente y participativa.<sup>4</sup> Además, añaden que **la ciudadanía podría estar cambiando de un rol pasivo a uno activo que busca relacionarse directamente con el proyecto y no tanto con las entidades**. Justamente, Izquieta y Callejo (2013) afirman que la participación asociativa en entidades benéficas u ONG no pasa tanto por la pertenencia a la entidad como por actividades de voluntariado, mientras que Claret (2015) sostiene que la juventud busca un activismo “de impacto”, que incluye el apoyo a protestas y movilizaciones más o menos

3 A partir de los datos proporcionados por la Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (DSAC) del Ayuntamiento de Barcelona, podemos visualizar los datos del FGEC según cómo ha evolucionado el número de entidades formales de acuerdo con su año de fundación. Encontramos que las entidades dentro de categorías relacionadas con el apoyo social y los derechos humanos (Mujeres, Diversidad sexual, Economía social, Apoyo social e Inmigración) se han mantenido en cerca del 20 % de entidades creadas anualmente desde los años 2000, mientras que las Deportivas, Culturales y de Educación se han mantenido cerca del 45-50 % de las entidades fundadas por esos mismos años. Por lo tanto, ambas tendencias avalarían lo que hemos visto en los datos de participación del CIS.

4 En cuanto a la tecnología, el Consejo indica que ha permitido nuevas formas de participación y de actores, y que, si bien los movimientos sociales han trabajado intensamente en la creación y difusión del discurso político y la reivindicación social, el tercer sector también ha querido mantenerse cerca de las administraciones en la consolidación del estado del bienestar.



espontáneas y vinculadas específicamente a una causa u objetivo. Es lo que se llama ***clicktivismo*** a través de redes sociales y plataformas de firmas por internet.

### 1.3. Evolución de las formas de participación puntuales y menos institucionalizadas

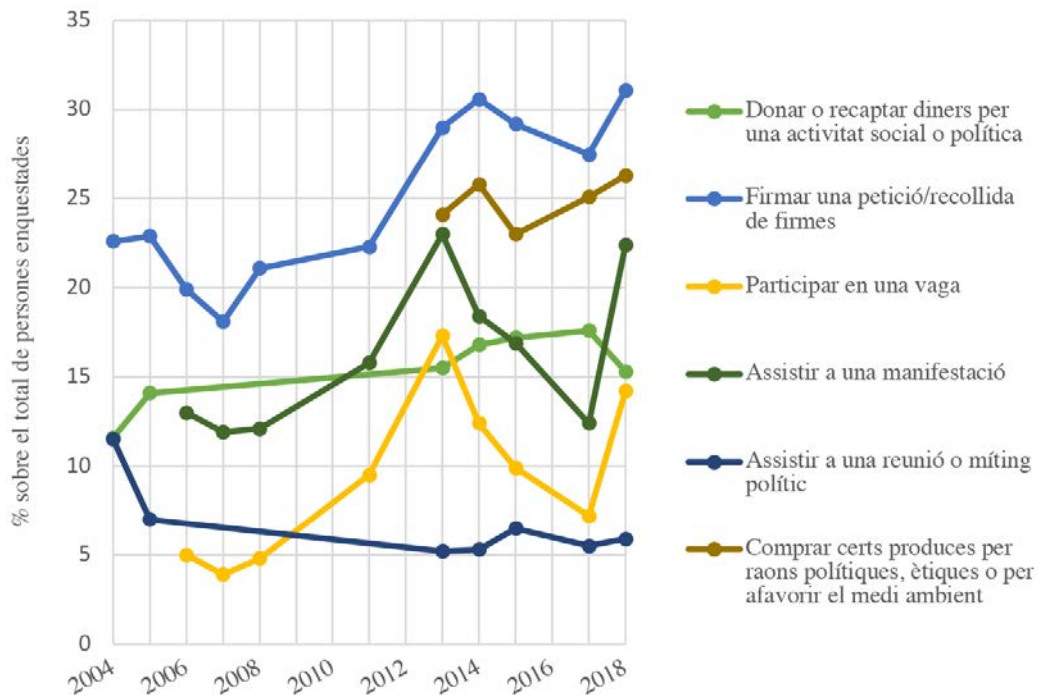
Los datos de las encuestas del CIS indicarían que sí que se están impulsando formas de participación política más directas y menos institucionalizadas. Por un lado, existe un aumento de las actividades que pueden realizarse desde casa. **El porcentaje de personas que firman una petición o participan en una recogida de firmas ha ido aumentando y ha pasado del 23 % en el 2004 al 31 % en el 2018.** También ha aumentado la participación para donar o recaudar dinero para una actividad social o política y se ha pasado de cerca del 12 % en los años 2004 y 2005 al 16 % en los últimos años.<sup>5</sup> Por último, también podría haber una creciente tendencia de personas que cambian en alguna medida sus pautas de consumo en base a consignas políticas o éticas, acciones que se sitúan en los últimos años en torno al 25 % de las personas encuestadas. Algunas de estas prácticas podrían ser, por ejemplo, el consumo de productos de proximidad, la alimentación saludable y la reducción del consumo de productos animales por motivos éticos.

**En cuanto a la participación en manifestaciones y huelgas, constatamos bastante variación en los últimos años, pero una tendencia creciente.** Si, en la situación previa a la crisis del 2008, en torno al 15 % afirmaban haber asistido a una manifestación en los últimos doce meses, este porcentaje llega a cerca del 20 % en los años 2011 a 2013. Estas cifras caen en años posteriores, lo que podría haber supuesto un repliegue de las fuerzas que alimentaban a los movimientos sociales en torno a iniciativas como el 15-M. No obstante, en el 2018 podría haberse vuelto a los niveles de 2013, con un 22,4 % de personas participando en una manifestación. Debido a que la encuesta del CIS del 2018 se realizó a principios de abril de 2018, podría estar capturando el aumento significativo en la participación de la manifestación feminista del 8-M y de las movilizaciones en Cataluña en relación con el independentismo. En cuanto a la participación en huelgas, sigue una tendencia calcada a las de las manifestaciones, aunque con una participación menor. Por último, los datos del CIS parecen indicar que la reducción en la participación en organizaciones políticas también ha supuesto una ligera caída en la participación en reuniones o mítines, pero en los últimos años se habría estabilizado en torno al 5 % de las personas encuestadas.

---

<sup>5</sup> Como ejemplo de esta tendencia, cabe destacar el papel de fundaciones como Goteo. Esta fundación que trabaja con el micromecenazgo para proyectos con un impacto social positivo pasó de canalizar una financiación por valor de 28.000 euros en el año 2011 a 2 millones de euros en el año 2019 (<https://fundacion.goteo.org/blog/goteo-informe-2018-primera>)

Figura 2. Evolución de las respuestas del barómetro del CIS a la pregunta “¿Ha participado en los últimos doce meses en: [actividad]?”. Porcentaje de las personas encuestadas, por cada actividad, 2006-2017

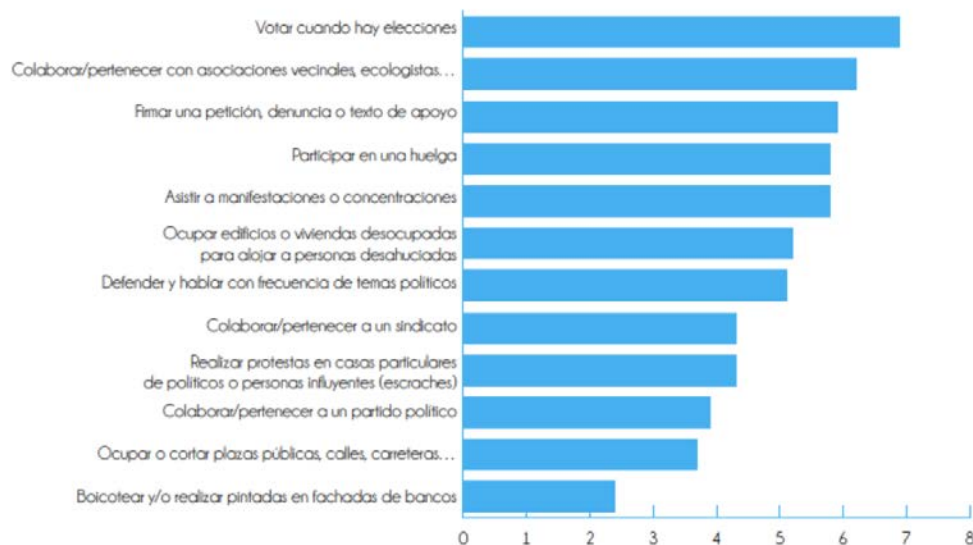


Fuente: elaboración propia con datos de encuestas periódicas del CIS. Población de más de 18 años (N » 2.475 por cada encuesta). Para el año 2007 se ha utilizado la encuesta con número 2633 y para el 2014, la 3021.

Según Ganuza y Francés (2008), las formas de participación puntuales y no convencionales, en comparación con formas más institucionalizadas, están relacionadas con **un mayor interés de la política, una mayor confianza social y una mayor frecuencia de interacción social y, en definitiva, pueden reflejar un gran vigor democrático**. Por el contrario, relacionan las formas más institucionalizadas con un menor interés en la interacción “cara a cara” fuera de la asociación. Los autores siguen afirmando que su análisis indica que son las formas no convencionales, no reguladas por grupos corporativos y que se alejan de las prácticas basadas en la negociación y la subvención, las que buscan tener una incidencia más directa con la política. Ahora bien, la relación entre el tipo de participación y la percepción respecto a la incidencia en la política puede ser más compleja. Por ejemplo, una investigación realizada por Muñoz (2015) indica que la juventud percibe como igual de útil políticamente, o más, votar cuando hay elecciones y colaborar o pertenecer a asociaciones que firmar una petición o participar en una huelga o manifestación.<sup>6</sup> Por el contrario, son consideradas menos útiles las formas de participación disruptivas (ocupaciones del espacio público, boicots) así como la participación directa en partidos o sindicatos.

<sup>6</sup> Nótese que, tal como señala el propio autor, la muestra que analiza sobrerrepresenta mucho a los jóvenes con niveles educativos altos.

Figura 3. Percepciones de la utilidad de las formas de participación política de jóvenes de entre 18 y 25 años, 2015



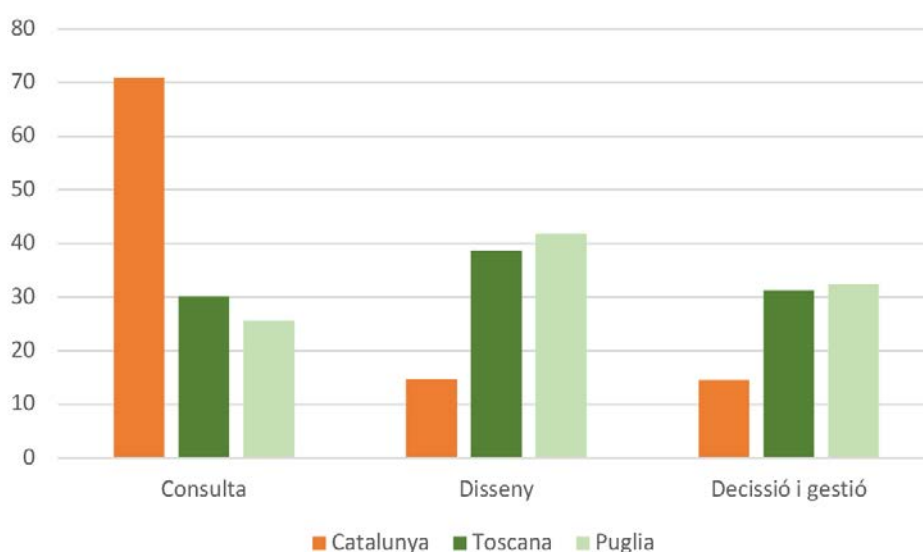
Fuente: Muñoz (2015).

#### 1.4. Características de los procesos participativos, en contexto

Dado el incremento de la participación política directa de la población, es interesante conocer en qué medida los procesos de participación ciudadana impulsados por los gobiernos permiten dar salida a estas actitudes. En este sentido, el estudio de Della Porta *et al.* (2014) realiza una comparación de los experimentos en procesos participativos llevados a cabo en regiones italianas y españolas hasta el año 2011. Aquí nos fijamos en si los procesos eran abiertos, en el grado de participación de ciudadanía y de organizaciones, en si había facilitadores que ayudaran a mejorar el proceso deliberativo, y en los papeles otorgados a los participantes en esos procesos. Los resultados son que en Cataluña los procesos fueron mayoritariamente abiertos a todo el mundo (el 63 % de los procesos estudiados). Esta cifra es más alta que en Madrid (43 %) y Andalucía (41 %), pero más baja que en las regiones italianas de la Toscana (87 %) y la Apulia (79 %) (Della Porta *et al.*, 2012: 79). Por otro lado, en Cataluña la ciudadanía participó en el 82 % de los procesos, mientras que las organizaciones civiles solo lo hicieron en un 40 % (Della Porta *et al.*, 2012: 82). En Madrid y Andalucía participó menos veces la ciudadanía (en el 65 % y el 61 % de los procesos, respectivamente), pero participaron más veces las asociaciones y organizaciones civiles que en Cataluña. En cuanto a las regiones italianas, la ciudadanía estaba presente en más del 90 % de los procesos estudiados y las organizaciones tenían también un rol importante. Por último, en el caso de Cataluña fue más frecuente la presencia de facilitadores en los procesos, con un 64 % que contaba con la presencia de, como mínimo, un facilitador, mientras que las cifras en regiones italianas fueron del 40-45 %, en Andalucía, del 31 %, y en Madrid, del 20 %. En conclusión, podríamos resumir estos resultados de la siguiente manera: **Cataluña tenía procesos participativos más abiertos y con más facilitadores para la ciudadanía que Madrid y Andalucía, pero en términos de participación y apertura a la ciudadanía se encuentra por debajo de las experiencias de las regiones italianas estudiadas.**

Ahora bien, es muy relevante cuál es la capacidad de influencia que tiene la ciudadanía en estos procesos. **En Cataluña, el 70 % de las experiencias de participación estudiadas fueron solo de carácter consultivo**, mientras que en las regiones italianas el 60 % de las iniciativas también implicaron diseño, decisión y gestión. Es decir, en España podemos hacer la hipótesis de que los mecanismos de participación vertebran las iniciativas sociales y que su papel principal es consultivo, lo que, a su vez, nos permite suponer que la política pública puede centrarse en dos aspectos: qué representación tiene la ciudadanía dentro de estas iniciativas sociales y qué supone, para el futuro de las organizaciones, no poder participar en la creación de políticas más allá de ser un órgano consultivo. De la misma manera, podemos interpretar que parte de la razón de la poca implicación directa de la ciudadanía en los procesos participativos se debe a la percepción de que tienen poca capacidad de incidencia.

Figura 4. Frecuencia del nivel de toma de decisiones en procesos participativos, por regiones y en porcentaje



Fuente: Della Porta *et al.* (2014), en Alarcón *et al.* (2015).

Como experiencias recientes en procesos participativos, tenemos la **iniciativa Decidim**, una plataforma digital abierta y libre para la participación y la innovación democrática, surgida en Barcelona en los últimos años. Según un informe de esta plataforma,<sup>7</sup> entre el 2016 y el 2019, el Ayuntamiento hizo 1.300 propuestas iniciales, la ciudadanía (individualmente) realizó unas 3.500 y las organizaciones, cerca de 1.600, mientras que los encuentros presenciales generaron aproximadamente 4.500 propuestas. **Por lo tanto, como mínimo en cuanto a la generación de propuestas por vía digital, la ciudadanía tuvo un papel más relevante que las organizaciones.** Además, si miramos los apoyos y comentarios que generaron, cada propuesta ciudadana generaba de media más apoyos y comentarios que las de organizaciones.<sup>8</sup>

También hay que mencionar que crear una división estricta entre ciudadanía y organizaciones puede no ser del todo adecuado, puesto que las propias organizaciones pueden ser grandes genera-

<sup>7</sup> [https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2019/03/02185426/Informe\\_Decidim\\_20191.pdf](https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2019/03/02185426/Informe_Decidim_20191.pdf)

<sup>8</sup> Cabe añadir que el porcentaje de propuestas ciudadanas no aprobadas fue relativamente más alto que el resto de mecanismos, con cerca de un 30 % rechazadas (mientras que las organizaciones tenían un éxito relativamente superior).

doras de actividad ciudadana al motivar o solicitar a miembros y simpatizantes su participación en procesos y la generación de propuestas individualmente. Ahora bien, incluso en este caso, el papel mediador de las entidades sería menor a si estas fueran las que realizan las propuestas. Así, con un alto número de participantes individuales, plataformas como Decidim podrían estar canalizando de manera fructífera la voluntad de participación de aquella ciudadanía que quiera hacerlo sin necesariamente implicarse de forma militante o a largo plazo en una organización.



## 2 Las iniciativas de innovación social como aproximación a las iniciativas informales

---

### 2.1. Grado de formalización de la innovación social y características diferenciales con respecto a las entidades del FGEC

Dada la complicación de medir lo informal y la consiguiente falta de estudios al respecto, hemos considerado que lo más aproximado al estudio de la participación son los estudios que ponen el foco en las iniciativas de innovación social, especialmente los trabajos realizados por equipos de investigación del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) y del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona (IERMB) (Blanco *et al.*, 2016; Martínez *et al.*, 2019; Antón-Alonso *et al.*, 2017). Entendemos que son una innovación social las iniciativas que tienen todas o algunas de las características señaladas por Antón-Alonso *et al.* (2017: 48): buscan satisfacer necesidades colectivas, se basan en la cooperación horizontal, tienen una vocación empoderadora, y propugnan y ponen en práctica alternativas a los modelos dominantes de relaciones económicas o de relación entre las personas y su entorno social y territorial.

La metodología de los estudios sobre innovación social no distingue explícitamente entre entidades formales y no formales, lo que permite en parte captar la realidad del mundo no informal. Por ejemplo, si comparamos las bases de datos de iniciativas sociales en Barcelona con el FGEC, podremos saber de alguna forma en qué medida la segunda está capturando la totalidad de la densidad del tejido asociativo, y, lo que es más importante, cómo las investigaciones sobre innovación social buscan aquellas iniciativas que cubran necesidades y busquen una participación horizontal. Cuanto menos de estas capture el FGEC, más podríamos hipotetizar que el asociacionismo formal sufre carencias en aquellas cualidades atribuidas a la innovación social.

Respecto a la ciudad de Barcelona, hemos utilizado la base de datos de Antón-Alonso *et al.* (2017). Esta investigación recogió 403 iniciativas de la ciudad, mientras que el FGEC tiene inscritas aproximadamente unas cinco mil entidades de Barcelona. Teniendo en cuenta que el estudio de Antón-Alonso *et al.* (2017: 50) construye la base de datos de iniciativas a partir de otras bases de datos<sup>9</sup> y de una búsqueda de internet, podemos pensar que el número de iniciativas informales es mayor, especialmente en todas aquellas iniciativas de apoyo mutuo que no tienen visibilidad en las redes sociales.

Para realizar la comparativa con el FGEC, se han incluido las entidades solo una vez: de aquellas que salen dos veces con dos categorías diferentes, se ha escogido la categoría más relacionada con la actividad fundacional principal o la más general. De esta manera, se ha pasado de un total de 403 entidades a 388.

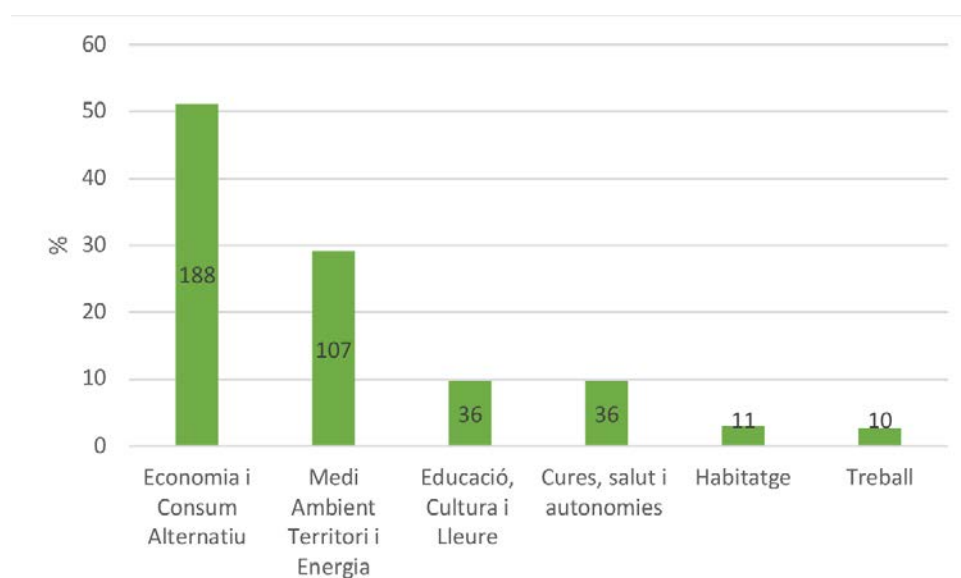
Si miramos primero la temática que trabajan las experiencias de iniciativa social en la ciudad de Barcelona, **solo una minoría, menos del 10 %, se dedica al ámbito de la educación, la cul-**

---

<sup>9</sup> Cartografías ya existentes (por ejemplo, "Los bancos de tiempo y la moneda social en España" y el "Mapa de los huertos urbanos de Barcelona") y datos en línea proporcionados por plataformas y entidades, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Coop57.

**tura y el ocio** (por ejemplo, cooperativas de enseñanza y arte comunitario), lo que contrasta con lo que pasa con bases de datos exclusivas por asociacionismo formal, en las que educación, cultura y deporte representan el 60 % de las iniciativas en Cataluña (Fornies y Aguilar, 2018: 73) y el 50 % en Barcelona (Palomera, 2019). Por el contrario, la mayoría en las experiencias de iniciativa social estudiadas para Barcelona son las enfocadas a economía y consumo (por ejemplo, bancos de tiempo y grupos de consumo) y representan el 45 % de las iniciativas, y a medio ambiente, territorio y energía (espacios autogestionados, huertos urbanos y energía alternativa), con el 28 % aproximadamente. Luego, encontramos cuidados, salud y autonomías (por ejemplo, grupos de crianza y de ayuda mutua), que no llegan al 10 %, y finalmente el trabajo (cooperativas de segundo grado y asambleas de desempleados) y la vivienda (cooperativas de viviendas y movimientos antidesahucio), que se quedan cerca del 2,5 % cada una.

Figura 5. Iniciativas de innovación social en el municipio de Barcelona, por categorías (en porcentaje sobre el total)



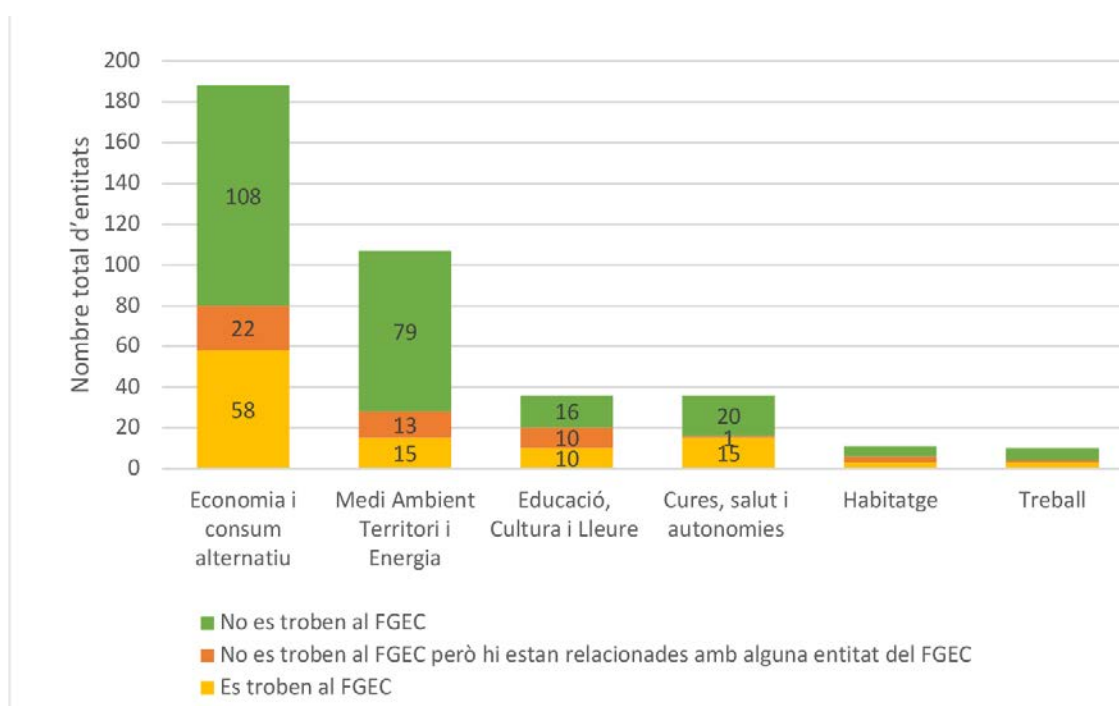
Fuente: elaboración propia con datos de Antón-Alonso *et al.* (2017).

La comparativa con el FGEC nos da como resultado que, de las 388 iniciativas incluidas en la base de datos de Antón-Alonso *et al.* (2017), el 60 % no se corresponde con ninguna entidad formal de las que figuran en el FGEC, el 27 % sí y el 13 % no figuran en él, pero podrían estar relacionadas con alguna de las entidades del FGEC. Algunos ejemplos de los últimos casos son bancos de tiempos vinculados a ateneos o asociaciones de vecinos, grupos de educación vinculados a asociaciones de padres y madres, huertos vinculados a entidades de barrio, etcétera. Si lo observamos por categorías, vemos que, de las iniciativas más numerosas, las de medio ambiente, territorio y energía son las que menos representadas se encuentran en el FGEC (con un 74 % fuera del FGEC), destacando sobre todo los huertos urbanos y los espacios autogestionados, mientras que el 54 % de las iniciativas de economía y consumo alternativo tampoco se encuentran en el FGEC, con una gran incidencia de grupos de consumo.

En general, **parecería que existe un importante mundo de iniciativas informales de carácter reivindicativo que buscan satisfacer necesidades y que, por lo tanto, son importantes para la acción comunitaria, pero quedan poco registradas por las herramientas que**

**estudian el asociacionismo formal, el cual, según lo expuesto en apartados anteriores, habría tendido a adquirir un papel de carácter más lúdico en las últimas décadas.** Ahora bien, la magnitud de este tejido más informal depende de hasta qué medida la base de datos de Antón-Alonso *et al.* (2017) sea exhaustiva. Si bien parecería que cerca de 400 iniciativas resulta poco ante las más de cinco mil entidades del FGEC, como ya hemos mencionado podemos tomar esa primera cifra como un mínimo de iniciativas. Por ejemplo, por conversaciones con uno de los investigadores de estos estudios, parecería que existe toda una serie de iniciativas en barrios menos desfavorecidos que reciben una participación significativa y cubren necesidades básicas, pero que tienen pocos recursos y escasa presencia en las redes (siendo este último espacio uno de los principales métodos de recopilación de datos de los estudios sobre innovación social).

Figura 6. Iniciativas de innovación social en el municipio de Barcelona que se encuentran en el FGEC o tienen alguna relación, por categorías y en porcentaje sobre el total



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Antón-Alonso *et al.* (2017) y de la investigación comparativa con el FGEC por parte del Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Barcelona.

## 2.2. Características de las iniciativas de innovación social en el ámbito metropolitano y en Cataluña

Tanto en el ámbito metropolitano de Barcelona como en Cataluña, la época de creación de las iniciativas de innovación social se concentra sobre todo en los años de crisis, especialmente a partir del 2011, cuando llegaban años de austeridad y el consiguiente aumento de las necesidades y cuando se produjo la descentralización del movimiento 15-M hacia los barrios (Martínez *et al.*, 2019; Antón-Alonso, 2017: 68). Así, estas iniciativas suelen tener una estrecha relación con los



movimientos sociales, sobre todo habiéndose originado muchas veces desde estos. Para poner las cifras en comparación con el mundo asociativo más formal, **si en el caso de las iniciativas de innovación social en Cataluña cerca del 55 % aparecieron entre 2008 y 2014, el 30 % de las asociaciones estudiadas por el Panoràmic aparecieron después, entre 2007 y 2017** (Fornies y Aguilar, 2018).

En cuanto a la dimensión de las iniciativas, en Cataluña son en su mayoría de carácter microcomunitario, ya que **el 50 % de las experiencias no superan las 50 personas**, y están formadas por pequeños grupos sociales que buscan satisfacer necesidades compartidas y establecer vínculos comunitarios entre sus miembros, así como promover alternativas de consumo, producción y relación con el entorno social (Martínez *et al.*, 2019). En eso, las cifras del mapa de innovación social no difieren mucho del mundo asociativo formal, en el que se estima que cerca del 50 % cuentan con 30 personas activas que participan de forma continuada y habitual en la organización (Fornies y Aguilar, 2018). Con respecto a los ingresos que se gestionan, **de entre las iniciativas de innovación social en Cataluña estudiadas por Martínez et al. (2019), el 38 % gestiona menos de 1.000 euros y el 50 %, menos de 5.000 euros**, mientras que en el mundo del asociacionismo formal solo el 22 % tiene menos de 5.000 euros (Fornies y Aguilar, 2018).

Ahora bien, tal como se indica en el estudio de Martínez *et al.* (2019), las iniciativas sociales de escala más micro se relacionan habitualmente entre sí, o bien forman parte de organizaciones sociales que trabajan a escala supralocal. Para la popularización de estrategias socialmente creativas, las iniciativas se basan en el trabajo en red (Eizaguirre, 2012: 358), y la capacidad de crecer y de expandirse de las iniciativas no depende tanto de su escalabilidad como de su **capacidad de contagio y de réplica** (Antón-Alonso *et al.*, 2017: 79-81). En los casos en los que resulta difícil impulsar un núcleo autónomo de una iniciativa, se vehicula a través de otros grupos o espacios que ya estaban funcionando. Por ejemplo, ante la falta de capacidad para montar una asamblea de la Alianza contra la Pobreza Energética en un municipio, se formó un grupo de trabajo dentro de una asamblea ya existente de un grupo antidesahucios. Un caso común es la proliferación de iniciativas en espacios autogestionados, que son a la vez generadores y acogedores y que, a menudo, tienen una estrecha relación con partidos políticos locales.



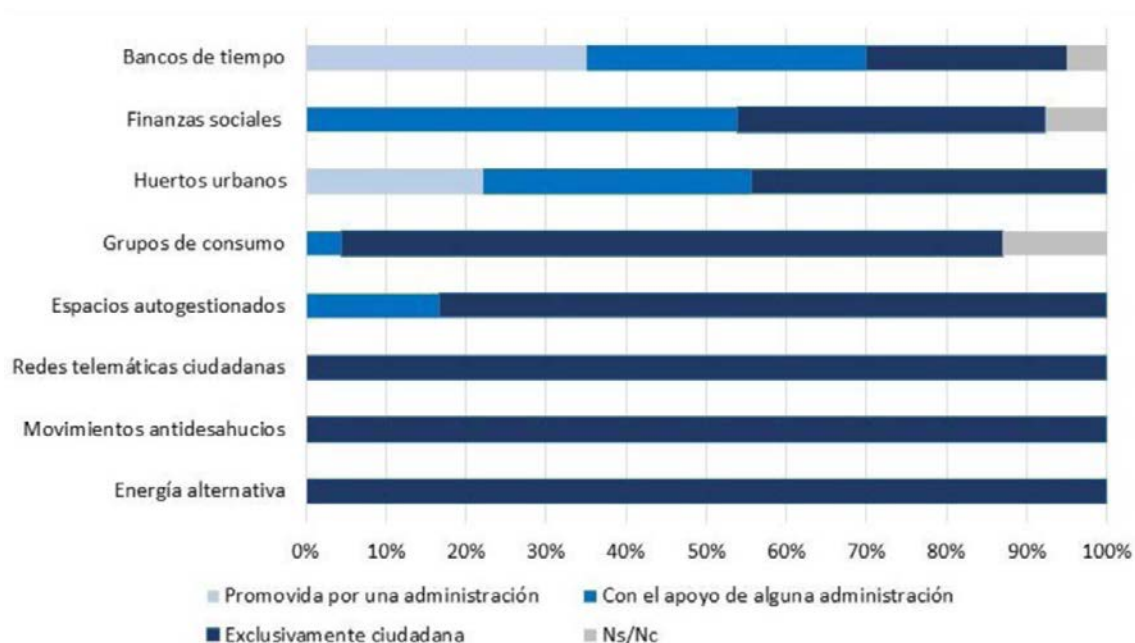
### 3 El papel de las administraciones públicas en las iniciativas de innovación social

---

Con respecto a dónde se originan las iniciativas, Blanco *et al.* (2016) y Antón-Alonso *et al.* (2017) las localizan sobre todo en zonas de baja desagregación, de estatus social medio y con una tradición y un tejido participativos significativos. Así, **son las clases medias con suficiente nivel socioeducativo las que disponen de los recursos para organizarse e impulsar iniciativas, mientras que en los barrios con menos recursos, si bien esas necesidades existen, se carece de un tejido social estructurado y tienen que volcarse todos los esfuerzos en cubrir necesidades básicas, lo que dificulta impulsar prácticas de innovación social** (Blanco *et al.*, 2016). Otros factores importantes son una cierta densidad poblacional y una estructura administrativa amplia que pueda actuar como plataforma para procesos de innovación política que, a la vez, promuevan la innovación social (Antón-Alonso *et al.*, 2017: 91). Precisamente es cuando las administraciones públicas pueden ofrecer a la sociedad civil recursos y servicios de bienestar que las entidades que tratan la desigualdad social pueden desarrollar una actividad más proactiva, comprometida y creativa (Eizaguirre, 2012: 360). Es un punto importante, como señala el autor, puesto que **no tiene que considerarse que una presencia más fuerte de políticas redistributivas tenga que hacer perder vitalidad a las entidades dedicadas a la exclusión social, sino más bien al contrario**, como demostraría su caso comparativo entre Bilbao y Barcelona.

Intentando poner cifras, cuando se trata de la relación con la Administración, una mayoría de las iniciativas sociales en Cataluña surgen desde la ciudadanía y, de forma autónoma, de instituciones y entidades privadas o del tercer sector. Según las encuestas realizadas por Martínez *et al.* (2019) a las iniciativas localizadas en Cataluña, cerca del 60 % responden en este sentido. Ahora bien, si se observa por categorías, existen diferencias significativas: los huertos urbanos y los bancos de tiempo, en su mayoría, han sido promovidos por las instituciones o con su apoyo, lo que indicaría la emergencia de políticas públicas innovadoras en los municipios catalanes (promover la participación comunitaria de espacios vacíos, así como intercambios horizontales y no monetarios de servicios). De este modo, las dinámicas de innovación social deben entenderse como un fenómeno complejo que varía significativamente en función de las áreas de innovación que tratan las iniciativas (Eizaguirre, 2012: 357). No tiene que descartarse aquí el importante papel que pueden ejercer los equipamientos públicos como sitio de encuentro y de utilización de recursos, sobre todo en el caso de las iniciativas que disponen de escasos recursos propios o que aprovechan las sinergias que se pueden generar con otras entidades en estos espacios. Convendría saber hasta qué punto las iniciativas consideran los equipamientos públicos como un apoyo de la Administración o si los consideran parte de la morfología urbana, pero sin asociarlos a la implicación directa de la Administración.

Figura 7. Origen de las experiencias de innovación social, Cataluña

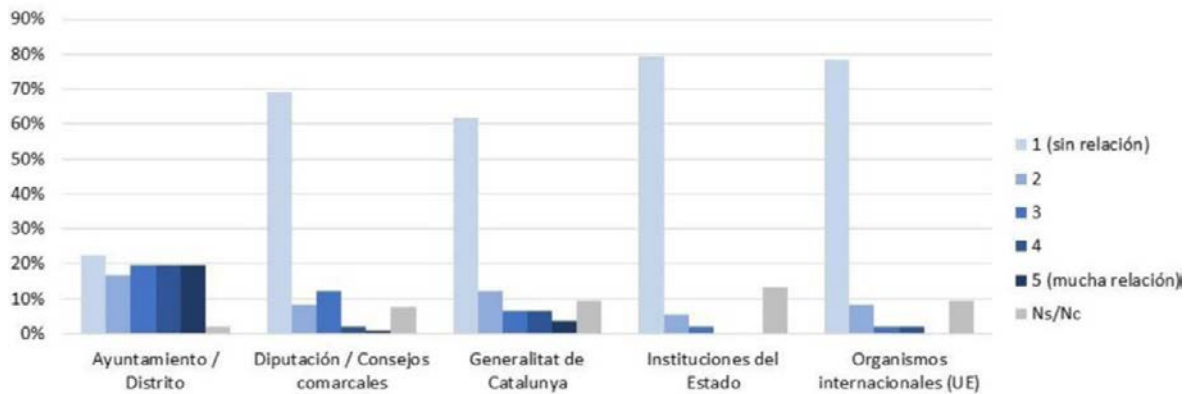


Fuente: Martínez *et al.* (2019).

Ahora bien, al preguntar a estas entidades por su relación con las administraciones una vez puestos en marcha los proyectos, **solo el 35 % sostiene que recibe muy poco o ningún apoyo de una administración. El mayor apoyo que reciben las entidades procede de la Administración local, mientras que el de otras escalas administrativas más amplias es casi inexistente.**<sup>10</sup> En cuanto al tipo de relación, Martínez *et al.* (2019) explican que las entidades buscan que no se cree una dependencia que pueda poner en peligro la sostenibilidad del proyecto y de la comunidad que lo conforma. Cano y Pradel (2018), a partir de estudios de caso, también encuentran que una mayoría de las iniciativas de innovación social, incluyendo las informales, buscan algún tipo de relación con la Administración en diferentes lugares del Estado, sobre todo cuando desean defender los derechos de ciertos colectivos. Además, en su estudio observamos que cuatro de las siete iniciativas de innovación social estudiadas por Barcelona que no se encuentran registradas en el FGEC (por lo que posiblemente sean más informales) **establecen relaciones con las administraciones a partir de procesos de participación o de planes comunitarios**, lo que indica la importancia de estos últimos como toma de contacto con las asociaciones informales. En el contexto catalán, las administraciones promueven la participación de entidades en procesos consultivos, pero las organizaciones tienden a participar de forma directa y aislada, siguiendo un esquema fragmentado (Eizaguirre, 2012: 351). Precisamente este autor señala que la relación entre el tejido asociativo y la Administración pública en Barcelona es poco compacta y coordinada, al menos en comparación con el caso vasco de Bilbao. En los procesos de negociación entre entidades y administraciones públicas, puede haber cierta tendencia a “fragmentar el debate en ámbitos temáticos aislando a las entidades socialmente creativas en compartimentos estancos” (Eizaguirre, 2012: 369).

<sup>10</sup> Por otro lado, el 66 % de las iniciativas encuestadas respondieron que no tenían ningún apoyo significativo de entidades del tercer sector.

Figura 8. Grado de relación con las administraciones



Fuente: Martínez *et al.* (2019)

Sobre la composición social de las iniciativas de innovación social, Antón-Alonso *et al.* (2017: 79-81) dividen los tipos de participantes de las experiencias en tres perfiles: **jóvenes (que no adolescentes) con niveles socioeconómicos medios, formación bastante alta y politizados**, y que suelen ser los que lideran las prácticas y generan las condiciones para que puedan desarrollarse (y en municipios donde faltan jóvenes se resiente la innovación social); **personas de la tercera edad** tradicionalmente implicadas en el movimiento vecinal y que participan sobre todo en la producción de servicios, y **personas recién llegadas durante la última oleada inmigratoria** que participan en iniciativas con un marcado carácter de asistencialismo. Según los propios autores, mientras que **las iniciativas que tienden más a cubrir necesidades (allí donde a veces el sector público se ha replegado) para combatir la crisis y defender los derechos sociales presentan una composición social diversa, las más orientadas a promover un modelo socioeconómico alternativo tienden a ser menos heterogéneas**. Con respecto a la continuidad y a la permanencia de la participación, depende de las necesidades y posibilidades locales. Entre los factores que debilitan la participación en las iniciativas, se encuentran los **límites del voluntarismo** y la dedicación al asistencialismo, así como el **grado de arraigo en el territorio**, un arraigo que sufre debido a los movimientos de población o a la morfología urbana de los municipios.

Un tema clave en cuanto a la interacción entre iniciativas ciudadanas y Administración pública es qué efecto producen las políticas de la segunda sobre la estructura organizativa y los liderazgos de la primera. El estudio de Gugerty y Kremer (2008) en Kenia y el de Toral (2010) en España alertan de los efectos de la Administración pública en las estructuras organizativas y sociales de las entidades. En el primer estudio, donde se realiza un cuasi-experimento a partir de un programa de subvenciones otorgado aleatoriamente, no se encuentran pruebas de que la financiación externa supusiera el fortalecimiento de una asociación de mujeres, pero sí produjo cambios en el tipo de miembros y liderazgos: **en la participación ganaron más peso las mujeres jóvenes, educadas y de un nivel socioeconómico más elevado, mientras que perdían y salían las mujeres de mayor edad y más marginadas socialmente**. En el segundo estudio, Toral (2010) estudia las organizaciones de inmigrantes en España. Sus conclusiones son que la intervención de las autoridades públicas, en forma de subvenciones o integración en órganos consultivos, pese a contribuir al mantenimiento de estructuras diversas y descentralizadas de atención social a inmigrantes, así como a la defensa de sus intereses (sobre todo de los de organizaciones con cierta capacidad de influencia), también **terminan actuando en detrimento de la integración horizontal y no contribuyen a fortalecer una red de organizaciones de inmigrantes enriqueci-**

**da por la participación activa de sus miembros.** Tal como afirman Della Porta y Diani (2006: 244, en Toral, 2010), si bien la burocratización puede aumentar la eficiencia, también desmotiva la participación desde abajo.

Los impactos que puedan tener las administraciones públicas en las organizaciones seguramente dependerán de la fortaleza y resistencia de las iniciativas sociales para mantener estructuras que permitan la diversidad social, la heterogeneidad y la horizontalidad de las decisiones. Aunque **recibir subvenciones no tiene por qué reducir la capacidad crítica de las entidades con respecto a las políticas públicas** (Eizaguirre, 2012: 357), Martínez *et al.* (2019) alertan de la **escasa reflexión crítica por parte de los actores que protagonizan las iniciativas de innovación social en torno a quién tiene capacidad para realizar acción colectiva e innovación social.** Y, tal como señalan los propios autores, si bien los actores de las prácticas de innovación social afirman alcanzar un alto grado de integración de grupos sociales más vulnerables, las propias dinámicas internas y **las inercias de reconocimiento entre actores pueden normalizar formas de exclusión sobre otros segmentos sociales.** Para generar diversidad y empoderar a sectores con menos recursos, es necesaria esta reflexión constante, ya que la innovación social depende de prácticas de alianza social con sectores con más recursos socioeducativos y de la promoción que puedan hacer las instituciones en las comunidades más vulnerables.

Por otro lado, en cuanto a la capacidad de las prácticas de innovación social de influir en la política pública, Eizaguirre, comparando los casos de Barcelona y Bilbao, indica:

“La conectividad entre sociedad civil y administraciones políticas se manifiesta con la sensibilidad de los partidos políticos en la adopción de las propuestas promovidas por la sociedad civil a través de los movimientos sociales. Una mayor fragmentación en el caso catalán de las relaciones de gobernanza entre la sociedad civil y la Administración pública, que se traduce en cierta distancia relativa, respecto del contexto vasco, entre los movimientos sociales y los partidos políticos, explicaría [...] la diferente disponibilidad de los sistemas de bienestar local de Barcelona y Bilbao a institucionalizar las dinámicas de innovación social”

(Eizaguirre, 2012: 339, traducción propia)

Por último, cabe recalcar que deben evitarse las reflexiones que tratan la innovación social y las iniciativas más informales como entes aislados de la Administración pública, lo cual, si bien puede servir como discurso para generar sensación de independencia, raramente sucede, dada la realidad compleja en la que vivimos. Cuando se trata la innovación social, hay que tener en cuenta la siguiente paradoja: aunque estas iniciativas surgen “tratando de configurar respuestas sociales alternativas a las ofrecidas por las instituciones públicas dominantes, la propia emergencia, expansión y consolidación de las innovaciones sociales requiere, en buena medida, del apoyo por parte de las mismas instituciones públicas” (Martínez *et al.*, 2019: 15). Esta reflexión resulta de especial relevancia en las zonas más desfavorecidas, donde, como hemos comentado más arriba, las iniciativas buscan resolver necesidades sociales concretas (ropa, vivienda, alimentación) y reclaman una mayor presencia del sector público del territorio, alejándose así de los ideales de autogestión con los que se asocia la innovación social (Blanco *et al.*, 2016), pero que, por falta de recursos, tienen menos fuerza para ponerlos en marcha.



## 4 Resumen y reflexiones finales

---

Si bien hasta los años 2000 en España la participación de la población en asociaciones había ido creciendo, se estancó ya, tras la crisis del 2008, en un **30-40 % de personas que decían pertenecer a una asociación**. Estas cifras, así como la participación en voluntariado, se encuentran lejos de las de otros países del contexto europeo, e incluso barrios con una elevada densidad asociativa, como el de Gràcia en Barcelona, tienen una densidad por debajo de otros barrios de ciudades europeas homologables (Morales y Mota, 2006). Por otro lado, **cada vez más la gente participa en más de una organización a la vez** (multiasociacionismo), lo que puede ser positivo por la confianza social y por la capacidad de vertebrar el tejido asociativo (Pena López y Sánchez-Santos, 2018).

Ahora bien, **el asociacionismo formal podría haberse estado alejando de un papel reivindicativo y priorizado un papel centrado en aspectos de realización personal y lúdicos, sobre todo en torno al ocio, el deporte y la cultura** (Izquierda y Callejo, 2013). Al mismo tiempo, la población, y sobre todo la juventud, ha tendido a realizar una participación **orientada individualmente y poco militante** (Pereda *et al.*, 2012), que pese a que puede favorecer al voluntariado, ha vaciado el asociacionismo formal de personas que quieren ocupar cargos de responsabilidad o tener una implicación a largo plazo (Fernández y Alonso, 2017). **Se buscan formas de participar más directas y de impacto**, lo que podría estar detrás del aumento constatado tanto en la participación en organizaciones de apoyo social y de defensa de los derechos humanos como en formas de participación no necesariamente articuladas por organizaciones, incluyendo la participación en manifestaciones y huelgas, la firma de peticiones, la donación de dinero a causas sociales o los cambios en hábitos de consumo por motivos políticos. Para entender estas tendencias, también hay que tener en cuenta el contexto político, como en el caso de la crisis económica del 2008 y la respuesta a la austeridad por parte de movimientos sociales, el auge del movimiento feminista a partir del 2017-2018, la emergencia climática o el efecto que pueda producir ahora la crisis sanitaria y económica de la covid-19.

Según Ganuza y Francés (2008), las formas de participación puntuales y no institucionalizadas pueden estar relacionadas con una mayor confianza social y reflejar mayor vigor democrático, por lo que su presencia creciente no debería verse como algo negativo. No obstante, la ciudadanía podría encontrarse con el papel de mediador que tradicionalmente han tenido las organizaciones formales en España en la articulación de la política pública, como en el caso de los procesos participativos ciudadanos. En **Cataluña los procesos suelen ser más abiertos y tienen mayor participación que la media española, pero el estricto carácter consultivo de la mayoría de procesos puede generar un distanciamiento de la ciudadanía hacia estos**. Nuevas formas de participación, como la plataforma Decidim, podrían servir como catalizadoras de este afán de la ciudadana por unas formas de participación directa más allá de roles consultivos.

Entendiendo que el tejido asociativo formal capturado por bases de datos como el FGEC puede no representar la totalidad de la realidad asociativa, hemos utilizado los estudios que investigan las iniciativas de innovación social para aproximarnos a las realidades más informales (Antón-Alonso *et al.*, 2017; Blanco *et al.*, 2016; Martínez *et al.*, 2019). El beneficio de utilizar estos estudios es que

han realizado un mapeo de iniciativas que pretenden satisfacer necesidades normalmente con un componente reivindicativo y de carácter más instrumental y menos lúdicas que las entidades formales más tradicionales. Utilizando la base de datos de Antón-Alonso *et al.* (2017), encontramos que, **de las aproximadamente cuatrocientas iniciativas de innovación social estudiadas para Barcelona, el 60 % no se encuentran en el FGEC**, el 27 % sí se encuentra y el 13 % no se encuentra, pero pueden estar relacionadas con entidades del FGEC.

Y, mientras que en el FGEC el 50 % de las entidades entran en las categorías de educación, cultura o deporte, en el caso de las iniciativas de innovación social este tipo de entidad más expresiva solo representa el 10 % de la base de datos. En las bases de datos de innovación social, **las iniciativas de economía y consumo y las de medio ambiente, territorio y energía son las mayoritarias, ya que representan el 45 % y el 28 %, respectivamente.** En cuanto a otras características, una mayoría de las iniciativas de innovación social nacieron después de la crisis del 2008 y especialmente después del 2011, cuando empezaba la austeridad y el movimiento del 15-M se descentralizaba en los barrios (Martínez *et al.*, 2019). Disponen de menos recursos económicos que el asociacionismo formal, pero no difieren mucho en cuanto a su tamaño en términos de personas participantes.

Territorialmente, **la innovación social tiende a aparecer en barrios y municipios donde hay densidad poblacional, un tejido asociativo compacto, baja segregación urbana, un nivel socioeconómico medio y una estructura administrativa amplia** (Blanco *et al.*, 2016; Antón-Alonso *et al.*, 2017). Pese a que las iniciativas de este tipo de barrios tienen como objetivo vertebrador ideales de autoorganización, en los barrios más desfavorecidos, donde faltan recursos para iniciar esas experiencias, suele buscarse satisfacer necesidades allí donde el sector público ha retrocedido en tiempos de crisis y **se solicita la implicación de la Administración.** Sobre quién inicia las experiencias, los datos demuestran que **muchas iniciativas de innovación social suelen surgir desde la ciudadanía y desde espacios autoorganizados** (muchas veces vinculadas a grupos políticos), si bien hay varias experiencias que se inician junto con la política pública, como pueden ser los huertos urbanos, los bancos de tiempo o las finanzas sociales (Martínez *et al.*, 2019). Una vez en marcha, **solo una parte minoritaria de las iniciativas dice no tener ninguna relación con la Administración local.**

Por lo que hemos visto en este estudio, **parecería que en Barcelona, por un lado, existe una parte importante de tejido asociativo que se nutre de la participación directa pero poco militante y, por el otro, una serie de iniciativas informales de carácter reivindicativo esenciales para la acción comunitaria en Barcelona y que dan salida a formas de participación menos institucionalizadas, pero que solo quedan parcialmente registradas por las herramientas que estudian el asociacionismo formal.**

Ante esta realidad, podemos indicar aquí algunas líneas de actuación posibles a escala local. En primer lugar, hay que avanzar hacia una integración de las distintas bases de datos que sea capaz de capturar las experiencias de innovación social, entendidas sobre todo como aquellas que buscan satisfacer necesidades y transformar la sociedad. Eso podría dar una imagen más precisa de la realidad del tejido asociativo y aumentar la visibilidad de las organizaciones de tipo más reivindicativo. Sin embargo, el mapeo no puede hacerse exclusivamente a través de internet, puesto que una sobrerrepresentación de iniciativas que tienen visibilidad en las redes sociales podría suponer, a su vez, la sobrerrepresentación de las iniciativas con más recursos para hacerse visibles y comunicar su proyecto. Es fundamental intentar que las representaciones del tejido asociativo

“desde arriba” no reproduzcan las desigualdades entre organizaciones y así detectar y satisfacer necesidades de la forma más equitativa posible.

Luego, dado que los puntos de encuentro con la Administración por parte de las iniciativas informales pueden ser escasos y que la ciudadanía busca individualmente una implicación más directa en el territorio, los **procesos participativos** pueden servir como una herramienta clave tanto para que las primeras entren en contacto con la segunda como para vitalizar la participación de las primeras en la segunda. Desgraciadamente, como hemos visto, los procesos participativos en Cataluña tradicionalmente han tenido en su mayoría un carácter meramente consultivo, por lo que **haría falta crear más espacios de diseño, decisión y gestión, así como proveerlos de personas facilitadoras que permitan generar debates de calidad** (Della Porta *et al.*, 2014). Otra herramienta de utilidad para vitalizar la participación y el tejido asociativo podría ser dotar de recursos a los espacios útiles para las iniciativas de innovación social, como pueden ser los equipamientos públicos y centros autogestionados, y democratizar su uso. Del mismo modo, la Administración puede tener un papel facilitador a la hora de generar una colaboración horizontal entre iniciativas, una colaboración que es clave para su sostenibilidad (Martínez *et al.*, 2019), así como para promocionar la visibilidad de las iniciativas y contribuir a la difusión y al empoderamiento de las iniciativas socialmente innovadoras (Eizaguirre, 2012: 270).

Aunque las iniciativas pueden tener recelos respecto de la implicación de la Administración debido a las situaciones de dependencia que se puedan generar, para que estas puedan consolidarse, sobre todo en los barrios más desfavorecidos, **hace falta la colaboración entre ambas** (Martínez *et al.*, 2019). Desgraciadamente, en Cataluña hay un “**esquema fragmentado en la negociación entre la sociedad civil y la Administración pública**, con escisiones claras dentro del sector social y un cierto distanciamiento entre entidades promotoras de dinámicas de innovación social y administraciones públicas” (Eizaguirre, 2012: 364, traducción propia). Y, tal como señala este último autor, más allá del fomento de la activación ciudadana y la dinamización comunitaria, una de las mejores formas de dar vitalidad al tejido asociativo (al menos a aquel destinado a mitigar la exclusión social) es hacer **políticas sociales comprometidas con la redistribución de recursos y servicios, y trabajar en escalas más amplias que el nivel estrictamente local**. De nuevo, esto resulta de especial relevancia para los barrios más desfavorecidos, donde las personas participan en iniciativas sociales que sobre todo buscan satisfacer necesidades urgentes en torno a la vivienda, la ropa o el alimento (Blanco *et al.*, 2016).

Por último, la Administración desempeña un papel muy importante en la composición social del tejido asociativo. Esto es particularmente relevante en la innovación social, dado que prolifera en zonas donde hay una población con más recursos socioeducativos (Blanco *et al.*, 2016). Si, por un lado, los propios participantes tienen que ser capaces de evaluar constantemente su capacidad de integrar perfiles diversos y huir de la homogeneización, la Administración pública tiene que procurar que las subvenciones o la invitación a formar parte de órganos consultivos **no genere dinámicas de expulsión de los participantes de nivel socioeducativo más bajo ni suponga un riesgo a la participación horizontal de las organizaciones**.





## Referencias

---

Alarcón, P.; Font, J.; Madrid, E. (2015). Participación ciudadana y desigualdad. Diagnóstico y líneas de actuación. Estudio de Oxfam Intermón.

Antón-Alonso, F.; Cruz, H.; Porcel, S.; Blanco, I.; Vidal-Folch, L.; Gomà, R.; Coll, F.; Cruz, I.; Ordás, C. A. (2017). Innovació i Metròpoli: Innovació social i política, densitat institucional i vulnerabilitat urbana a la Barcelona metropolitana. IGOP-UAB, IERMB, Àrea Metropolitana de Barcelona.

Ariño, A. (2004). "Asociacionismo, ciudadanía y bienestar social". *Papers - Revista de Sociologia*, 74, 85-110.

Blanco, I.; Cruz, H.; Martínez, R.; Parés, M. (2016). "El papel de la innovación social frente a la crisis". *Ciudad y Territorio Estudios Territoriales (CyTET)*, 48(188), 249-260.

Cano, A. B.; Pradel, M. (2018). "Barcelona: ¿Hacia nuevas formas de institucionalización?". En VV. AA., *El momento de la ciudadanía: innovación social y gobernanza urbana*, pp. 101-122. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Claret, A. (2015). "Asociaciones, movimientos y redes. El *continuum* de la participación juvenil". En Joan Subirats (dir.): *Ya nada será lo mismo. Los efectos del cambio tecnológico en la política, los partidos y el activismo juvenil*, pp. 28-45. Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.

Della Porta, D.; Diani, M. (2006). *Social movements: an introduction*. 2.<sup>a</sup> ed., Oxford: Blackwell.

Della Porta, D.; Reiter, H.; Alarcón, P. (2014). "Institutional Participatory Initiatives and Democratic Qualities". En J. Font, D. Della Porta y Y. Sintomer (ed.): *Participatory democracy in Southern Europe: causes, characteristics and consequences*, pp. 71-114. Londres; Nova York: Rowman & Littlefield.

Fernández, M.; Alonso, A. (2017). "El Tercer Sector en l'escenari post-crisi. Una visió a partir del Consell Assessor de Recerca". Col. "Debats OTS"; 1. Observatori del Tercer Sector.

Fornies, A.; Aguilar, M. (2018). El Panoràmic 2017, dades i anàlisi per enfortir el sector no lucratiu català. Barcelona: Torre Jussana - Centre de Serveis a les Associacions. 2.<sup>a</sup> época (vol. 4).

Ganuzo, E.; Francés, F. J. (2008). "¿A qué llamamos participar en democracia? Diferencias y similitudes en las formas de participación". *Revista Internacional de Sociología*, 66(49), 89-113.

Gugerty, M. K.; Kremer, M. (2008). "Outside funding and the dynamics of participation in community associations". *American Journal of Political Science*, 52(3), 585-602.

Eizaguirre, S. (2012). *Innovació social i governança urbana: entitats socialment creatives a Barcelona i Bilbao*. Tesis.

Izquieta, J. L.; Callejo, J. J. (2013). "Asociacionismo y participación voluntaria de los jóvenes españoles. Cambios y tendencias actuales". *Cuadernos de Trabajo Social*, 26(1), 159.

Martínez, R.; Cruz, H.; Blanco, I.; Salazar, Y. (2019). "La innovación social, ¿prácticas para producir autonomía, empoderamiento y nueva institucionalidad?". *Revista Internacional de Sociología*, 77(2), 126.

Morales, L.; Mota, F. (2006). "El asociacionismo en España". En J. R. Montero, J. Font y M. Torcal (coord.), *Ciudadanos, asociaciones y participación en España* (pp. 77-104). Centro de Investigaciones Sociológicas.

Muñoz, J. (2015). "Ni contigo ni sin ti. Los jóvenes ante la crisis política: legitimidad de las instituciones, despolitización y politización alternativa". En Joan Subirats (dir.): *Ya nada será lo mismo. Los efectos del cambio tecnológico en la política, los partidos y el activismo juvenil*, pp. 46-73. Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.

Palomera, D. (2019). *Explotació del Fitxer General d'Entitats Ciutadanes: una primera exploració*. Direcció del Servei d'Acció Comunitària, Ajuntament de Barcelona.

Parlamento Europeo (2011). Eurobarómetro Especial del Parlamento Europeo 75.2. *Unidad de Seguimiento de la Opinión Pública*.

Pena López, J. A.; Sánchez-Santos, J. M. (2018). "Capital social, confianza y modelos de asociacionismo en España". *Papers. Revista de Sociologia*, 103(2), 153-173.

Pereda, C.; Actis, W.; De Prada, M. A. (2012). "La participación ciudadana. Algunos apuntes a partir del Barómetro Social de España". *Cuadernos de Trabajo Social*, 25(2), 309-319.

Rodríguez, J. A.; Bosch, J.; Mérida, F. (2003). *El capital social como vertebrador de la sociedad*. Working Paper. Universidad de Barcelona.

Toral, G. (2010). "Las asociaciones de inmigrantes como sociedad civil: un análisis tridimensional". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas (Reis)*, 132(1), 105-130.

Vázquez, R. (2010). *Compromiso cívico y democracia: los efectos democráticos del asociacionismo sociopolítico en España*. Centro de Estudios Andaluces.

